Imprimir

Firmar una bomba minutos antes de ser lanzada para atacar un blanco enemigo, así sea en una operación legal y con un propósito legítimo, envilece antes que glorificar a quien la protocoliza. No es un acto de lucimiento; es una muestra más del clímax de la degradación y del fracaso de la humanidad como especie.
¿Para qué ese alarde de arrogancia y sobradez de un hecho que para nada y por nadie merece celebrarse en un país que, si de algo se duele, es de la manera como lo desluce la violencia?

La firma no le da más brillo o efectividad a la operación, pero sí denota la bajeza de quien disfruta de la guerra con saña y con frivolidad morbosa. El verdadero guerrero es cauto, no sabe de humillaciones, no presume, no demuestra soberbia, no deshumaniza a su adversario ni se ufana sin pudor ante su muerte. Jamás la guerra puede arrogarse como un acto lúdico; el triunfo es también la capacidad de promover un ideario frente a la inutilidad de la misma.

Abelardo de la Espriella, diminuto por antonomasia, minúsculo en todos los sentidos, se ve ridículo en sus poses de monaguillo armado y de valiente asintomático. No exalta propiamente el patriotismo ni rinde honor a las fuerzas armadas, a las que más bien expone a la humillación y está llevando a mayores sacrificios, mientras posa para las redes en simulados campos de batalla, resguardado por una nutrida escolta que protege su cobardía.

Está fuera de foco si cree que con el ensalzamiento de su vanidad se va a resolver un conflicto que lleva ya más de seis décadas y en el que protagonistas de más talla física, ética, moral e intelectual han fracasado. Nada dice una bomba que, luego de su activación, sumó cuatro cuerpos más al conteo de muertos y dejó seis nuevas capturas. Más vale un gobernante capaz de suscribir su voluntad de enfrentarse a las razones de la guerra, que aquel que se vanagloria en celebrar sus desastres y rubricar la muerte.

Lo que va quedando claro es que, antes que elegir a un presidente, Colombia puso a un párvulo en la salacuna; un *enfant mimado* que se siente frente a un país de juguete y a una realidad que lo distrae en sus frustraciones y lo complace en sus fantasías.

Tenemos en la presidencia a un aprendiz de mago, a un personaje que ha reducido los valores a su falta de escrúpulos; un engaño virtual; un limitado que parasita cabalgando en sus ínfulas y nos está arrastrando a no sabemos qué, a no sabemos dónde; eso sí, a un escenario cada vez más incierto, más difícil, más convulso.

No es posible un presidente que se olvida de que, aun en la más compleja de las situaciones, existen límites jurídicos, éticos e institucionales que no puede sobrepasar. Tampoco puede sustraerse de que no se representa a sí mismo sino a la dignidad de un Estado, unas fuerzas armadas, un orden social y una ciudadanía a la que la democracia faculta como vigilante y reguladora de sus actuaciones.

Los operativos militares no pueden ser expuestos como un *reality show* para el envanecimiento del presidente. Deben, por el contrario, ponerse bajo el paraguas de las normas del derecho nacional e internacional, los principios humanitarios, la aplicación de las reglas debidas en el uso de la fuerza, la protección de los civiles, de las personas especialmente protegidas y del respeto a quienes son capturados o muertos en combate.

Todo lo anterior a cuenta de que en las acciones realizadas han muerto menores de edad y civiles ajenos a las hostilidades, y a que se ve de manera recurrente al presidente insultando a personas detenidas, caminando entre cadáveres y luciendo armas y uniformes de las fuerzas armadas. Son manifestaciones que contravienen el Estado de derecho, reflejan usurpación de funciones —especialmente las que corresponden a las autoridades judiciales—, además de mostrar la pobreza humana y el ridículo al que se expone el presidente cuando se enfrenta boca a boca con presuntos delincuentes maniatados.

Queda solo por señalar que una teatral maniobra comunicativa está ocultando la falta de una verdadera estrategia de seguridad, que lo que muestra hasta ahora son resultados realmente preocupantes. Como se advertía al comienzo, los pantallazos de presidente no propiamente rinden honor a las fuerzas armadas, sino que más bien las exponen a la humillación y las están llevando a mayores sacrificios.

Basta señalar que, de acuerdo con algunos medios y centros de investigación, se han incrementado los hechos de violencia, particularmente los asociados con el conflicto armado. En los primeros 90 días de gobierno se presentaron 43 bajas de miembros de la fuerza pública, entre militares y policías. Fueron heridos 219 uniformados: 136 del Ejército, 79 policías y 4 integrantes de la Armada. Aumentaron en 315 % los homicidios atribuidos a grupos armados y en 152 % el reclutamiento de menores, en comparación con el trimestre inicial del gobierno de Gustavo Petro. En el mismo periodo, el número de personas confinadas subió de 8.436 a 21.482, equivalente a un aumento del 155 %. Los casos de terrorismo aumentaron de 84 a 339, es decir, un 304 %.

Es claro entonces que en materia de seguridad no existe ninguna novedad para un gobierno que ha hecho de ella su principal bandera. Se mantiene la dinámica de bajas y capturas con golpes sin mayor impacto (si de objetivos de alto valor estratégico se trata), que no afectan para nada las estructuras de los grupos armados y las organizaciones delincuenciales, ni disminuyen tampoco su capacidad militar y su poder de control en los territorios.

Si la seguridad del país sigue dependiendo de las puestas en escena de un fabulador, un prisionero de sus vanidades y sus cárceles interiores, no iremos más allá de consagrarnos a un régimen dictatorial y a una paz guarecida en los sepulcros, que no será más que un nuevo eslabón en la serie de fracasos que ha enfrentado Colombia.

Orlando Ortiz Medina, Economista-Magister en estudios políticos

Foto tomada de: El País